

La economía popular es más que la suma de microproyectos. (Alternativas para el desarrollo humano en un mundo globalizado)

José Luis Coraggio

I. Globalización

La globalización del mercado significa la desactivación de la mayoría de los instrumentos jurídicos que los Estados utilizaban para dirigir la economía nacional cuando se buscaba el desarrollo industrial centrado en el mercado interno. Esos instrumentos eran utilizados para diferenciar el mercado interno del mercado externo, y la interacción entre agentes de los mercados así conformados daba lugar al «mercado internacional». En particular, la regulación de los mercados de trabajo y de divisas dio lugar a un campo de múltiples confrontaciones particulares, cuya resolución coyuntural fue dando lugar a una enmarañada trama de disposiciones legales para proteger los derechos sociales de las mayorías, pero también los privilegios de algunas fracciones minoritarias. Hoy está en la agenda de todos los gobiernos la «liberalización» del mercado de trabajo y la del mercado de capitales. A la vez, la revolución tecnológica, que impulsa ciegamente en su furor competitivo al capital global, hace que el trabajo pierda parte de su centralidad como categoría alrededor de la que se estructuran clases e identidades, y que el capital financiero se convierta en el sujeto que reorganiza economías, sociedades y culturas.

El mercado inter-nacional iba acompañado de su correlato social: la diferenciación entre burguesía nacional y burguesía extranjera, lo que suponía que el capital podía encarnarse en sujetos que, estando igualmente motivados por la búsqueda de mayores ganancias, tenían un comportamiento y objetivos particulares distintos frente a la relación entre acumulación privada y desarrollo nacional. La burguesía nacional se suponía objetivamente interesada en el crecimiento del mercado interno y, por tanto, con una conciencia favorable a alianzas con las clases trabajadoras. Un incremento de los salarios reales y una ampliación de las clases medias significaba costos mayores pero también una ampliación del mercado, pues se revertía en demanda para la producción nacional. Por su lado, el sector del capital ubicado en actividades de exportación y/o importación, de propiedad nacional pero interesado en abrir la economía para acceder al mercado externo y bajar sus costos, aparecía en contradicción con

las fracciones nacionales y como aliado estratégico del capital externo.

En ese sistema, la protección del mercado interior atraía fracciones productivas del capital extranjero, imposibilitadas de hacer penetrar los productos producidos en los países centrales. La inversión externa —siempre bajo control de los gobiernos nacionales, que decidían en qué ramas y bajo qué condiciones podía establecerse— era vista como condición para el desarrollo y la modernización productiva, pero un riesgo para la soberanía nacional. En todo caso, siempre quedaba abierta la cuestión del uso de las ganancias generadas en el país, que se pretendía fueran reinvertidas en lugar de ser remesadas a las casas matrices. El control de cambios, hoy llevado a su mínima expresión o inexistente, fue un instrumento privilegiado para lograr tal objetivo.

Entonces, si es cierto que el Estado jugó un papel fundacional en el desarrollo del mercado, también lo estructuró como mercados internos articulados en un mercado inter-nacional. Pero hoy los Estados presiden la conformación de un mercado global o mundial, y eso significa que aquellas diferenciaciones y segmentaciones sociales y económicas, políticamente sustentadas por el Estado-Nación, tienden a desdibujarse. Significa que el territorio nacional tiende a ser un lugar dentro de un espacio de fuerzas que operan sin barreras políticas. Significa que el empresario global y el consumidor global son las figuras centrales de la economía de mercado.

Pero ni siquiera la entronización del dinero mundial uniformará totalmente los diversos lugares del globo. Subsistirán diferencias geográficas, culturales, de infraestructura, y económicas, pero —se nos dice— ya no serán resultado de la decisión política sino del libre juego de las fuerzas del mercado operando sobre factores históricos o geográficos. Tampoco se cumplirá ahora la promesa de la teoría neoclásica: el libre movimiento de los factores no llevará a uniformar ingresos y oportunidades. Porque los países entran a las reglas del juego del mercado global con distinto ritmo (los países centrales mantienen todavía un alto control político del comercio internacional e imponen condiciones económicas y extra-económicas a los países más débiles; los organismos internacionales tratan la deuda de los países centrales de manera muy diversa a la de los del resto del mundo) y el punto de partida mismo es muy diverso.

Aquellos lugares que se inician con ventajas para el capital y sistemas de gobernabilidad eficientes tienen mayor probabilidad de convertirse o confirmarse como centros del poder económico y financiero y como concentraciones de los componentes más dinámicos de las actividades económicas. Otros lugares pueden todavía atraer capitales manteniendo o facilitando ventajas unilaterales, como el bajo costo de la mano de obra (por la vía de los bajos salarios o de los bajos costos de la seguridad social que busca el ajuste estructural), la irrestricta seguridad jurídica y política a los derechos de propiedad del capital, la «disciplina» laboral, y otras que puedan hacer una diferencia significativa para la tasa de rentabilidad de las inversiones. Minimizada la capacidad de los estados de crear diferencias «artificiales», las ventajas «reales» suelen ser verdaderas exacciones sobre el patrimonio nacional acumulado bajo el régimen anterior (privatizaciones a precios de «piñata», concesiones de virtuales monopolios en los servicios públicos, etc.) o significar la exclusión y pérdida brutal de derechos adquiridos por la clase trabajadora, incluyendo a amplios sectores medios.

Un resultado de este proceso es que tiende a perder relevancia la diferenciación entre «burguesía nacional» y «burguesía extranjera», o entre capitales con esa denominación. Viejas o nuevas fracciones del capital productivo propiedad de nacionales se pliegan a la desindustrialización, se vuelven especulativas o comerciales, se asocian subordinadamente con capitales de ámbito global, participan de la «piñata» de las privatizaciones, invierten a través de agentes financieros, sin saber bien para producir qué ni dónde en el mundo. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), teóricamente capaces de resolver el problema del desempleo, de ocupar el espacio del capital nacional, no realizan tal ilusión, por falta de políticas adecuadas pero también de posibilidades reales en un mercado libre donde la brutal concentración del capital subsume todo lo significativamente rentable. Por lo demás, es probable que una efectiva modernización tecnológica de las PYMES reduciría significativamente sus ventajas en la creación de empleos.

Poco a poco tiende a diluirse la capacidad de las fracciones locales remanentes del capital para influir sobre los poderes públicos, y los gobiernos nacionales pasan a negociar direc-

tamente con los lobbies de capitales globales, mediados o no por los poderes políticos de otros países. Por su parte, la clase trabajadora comienza a sufrir las consecuencias de un mercado global de trabajo en que tienen que competir con la élite de trabajadores, técnicos y profesionales asociada a los centros de altas tecnologías y a la vez con la masa de trabajadores sustituidos, ubicados en verdaderas zonas francas, «libres» de derechos sociales e impuestos, donde los costos salariales son apenas una fracción de lo que históricamente se alcanzó en los países ligados al desarrollo industrial. A esto se agrega la insuficiencia dinámica de la acumulación capitalista, que no alcanza a incorporar sino que más bien expulsa fuerza de trabajo a medida que crece la producción.

La situación de las clases que no tienen más recursos que su trabajo sufre, por ello, un proceso de regresión con altísimas tasas de desempleo, subempleo y precarización, resultado de un proceso global de reestructuración tecnológica y de los mercados a escala epocal. Sin embargo, salvo para sectores de marginalidad total, el consumo de las masas urbanas empobrecidas sigue siendo negocio para el gran capital como lo demuestran los hipermercados (destructores del pequeño comercio), los servicios de esparcimiento (el fútbol como negocio, la TV-cable), o la venta de paquetes de alimentos para los programas sociales.

II. Desarrollo Humano

Siempre se dio un contrapunto entre las teorías del crecimiento y las que se autodiferenciaban como teorías del desarrollo. Siempre se previno que podía haber crecimiento sin desarrollo, es decir, sin la transformación institucional, tecnológica y social que suponía el paradigma de la modernidad. ¿Cuál es entonces la novedad de adjetivar el desarrollo como desarrollo «humano» para contraponerlo con el crecimiento económico?

En una primera aproximación, la perspectiva del desarrollo humano implica centrar la atención y la acción, en particular la del Estado, pero también la de otras formas de acción colectiva-directamente en la evolución de las condiciones de vida de los sectores sociales,

particularmente de aquellos que no llegan a los niveles considerados como mínimos en cada época y sociedad. Así como los indicadores del crecimiento económico para las teorías economicistas, son aquí centrales los indicadores de equidad social y de calidad de vida. Además, la perspectiva del desarrollo humano reafirma que el crecimiento económico no produce de por sí una mejoría en las condiciones de vida, a través de lo que se ha denominado «efecto de derrame», por lo que es preciso invertir directamente en la gente, logrando mejorías inmediatas en la salud, en la educación, en la seguridad y en general en la calidad de vida de todos los miembros de la sociedad o, lo que sería lo mismo, invertir en capital humano.

¿Qué significa esto como estrategia de inversión para una sociedad que sigue siendo capitalista? Por su propia naturaleza, mientras siga siendo capitalista, la inversión privada se orienta hacia aquellas actividades en que haya o se pueda crear una demanda solvente que le permita realizar ganancias. La demanda solvente es el criterio que define sus prioridades, no la satisfacción de las necesidades más urgentes. Similar criterio orienta sus decisiones tecnológicas, las que definen cómo se va a producir —por ejemplo generando más o menos empleo, degradando o cuidando el medioambiente, desarrollando las capacidades humanas o las de los robots, etc.

El capital y sus agentes no tienen reparos en invertir para producir alimentos imprescindibles, o vivienda, en organizar escuelas privadas o gestionar las artes, siempre que puedan lucrarse con su venta a quienes los necesitan. Pero que el capital invierta en producir satisfactores de las necesidades humanas no es lo que se quiere significar con «invertir en la gente». Mucho menos bajo condiciones de desigualdad brutal en la distribución de los ingresos y con una exclusión creciente del mercado de trabajo, pues una gran proporción de «la gente» no puede expresar sino una parte de sus necesidades indispensables como demanda solvente en el mercado. El funcionamiento libre de la economía de mercado deja así fuera del rango de lo humano a ingentes masas de la población mundial.

Dentro del sistema capitalista, parecerían quedar tres vías (todas ellas políticas) para cumplir con el mandato de «invertir en la gente», aunque no sea negocio:

Primera vía: que el Estado ejerza con autonomía relativa su poder político, recuperando (principalmente por la vía fiscal) una parte de los ingresos apropiados por las minorías asociadas al capital, para:

1.1. Reciclarlos para orientar al mismo mercado capitalista, en forma de demanda pública al sector empresarial de:

a) bienes y servicios de primera necesidad para ser distribuidos en forma gratuita o subsidiada entre quienes carecen de medios para adquirirlos en el mercado; esa distribución puede hacerse: directamente por las mismas empresas públicas, cubriendo los costos de tal distribución; con la intermediación remunerada de organizaciones sin fines de lucro (voluntariado, ONGs, organizaciones comunitarias y sociales, etc.);

b) obras de infraestructura productiva o social, con la intención de dinamizar la inversión y la demanda capitalista de trabajo, contribuyendo a ampliar la oferta de servicios sociales pero además incorporando por esta vía indirecta a una parte de los desempleados;

1.2. transferirlos como subsidios (por ejemplo, mediante un seguro de desempleo, o mediante un salario social mínimo garantizado) para que sean sus perceptores quienes orienten al mercado con sus nuevas demandas.

Segunda vía: como variante a lo anterior, que el Estado invierta los ingresos recuperados en subsidiar:

2.1. empresas públicas que produzcan y distribuyan bienes y servicios de primera necesidad según criterios de prioridad y equidad social (educación, salud, paquetes alimentarios, etc.);

2.2. asociaciones sin fines de lucro que cumplan esas mismas funciones;

2.3. sistema de pensiones y jubilaciones, cubriendo el déficit que produce el desbalance entre aportadores y beneficiarios resultante de la reestructuración tecno-económica.

Tercera vía: que el Estado use ese excedente captado como un fondo (parcialmente reversible) de inversión social, al que puedan acceder con preferencia y/o con costos subsidiados:

3.1. las pequeñas y medianas empresas, caracterizadas por una alta generación de empleo por unidad de producto, apoyando con asistencia técnica el desarrollo de sus capacidades para participar del mercado, en competencia o asociación con el gran capital;

3.2. los trabajadores individuales o asociados (microempresas familiares, cooperativas) dispuestos a producir para el mercado, complementando o compitiendo con las empresas del capital. De ese modo, a través de emprendimientos no estrictamente empresariales, obtendrían los ingresos para ejercer un poder de demanda que reorientara la inversión capitalista y la propia hacia los sectores de producción de bienes y servicios de primera necesidad. En esta variante, los agentes a cargo de los programas pueden ser:

a) organizaciones estatales a cargo de los programas;

b) organizaciones sin fines de lucro que, con bajos costos, canalizan los recursos y promueven las nuevas actividades según una combinación de criterios de eficiencia social y de mercado;

c) asociaciones de productores.

Esas tres vías, que se han venido experimentando, muestran pocas probabilidades de poner en marcha un proceso autosostenido con nuevos equilibrios socioeconómicos y políticos, y constituyen medidas paliativas de un proceso brutal, generado por la liberación de las fuerzas del capital y sus megamecanismos mediáticos de generación de pautas culturales, orientadas hacia el consumismo (y una insatisfacción) sin límites. En todo caso, para efectivamente compensar los efectos sociales de la globalización, tales vías deberían ser continuamente «subsidiadas» por la voluntad política y la transferencia de excedentes, de manera uniforme y a escala global, algo improbable por la continuada lucha de las grandes potencias para no perder su posición en el sistema mundial.

Aunque esas vías serían funcionales para un capital no salvaje, cuya clase dirigente incorporara en su estrategia global la gobernabilidad democrática, la sustentabilidad social y la ecológica, su necesario alcance global supone la constitución de un poder político democrático a nivel global como ha venido sugiriendo la Secretaría de las Naciones Unidas y algunos de sus organismos, algo que enfrenta la resistencia de las principales potencias mundiales.

En todo caso, subsistiría la tensión entre las tendencias objetivas del mecanismo capitalista y una utopía de sociedad de hombres libres. Presuponer que la justicia social se logra cuando todos tienen acceso a un mínimo de satisfactores históricamente determinado sólo

desplaza la cuesti n: esa determinaci n hist rica es resultado de un proceso social, de desarrollo de nuevos medios para cubrir necesidades insatisfechas, pero tambi n de creaci n de necesidades por medio de la manipulaci n simb lica, lo que supone una definici n de la buena vida, el dise o de una cultura en sentido amplio. Si se cumplieran los presupuestos de la teor a neocl sica, los consumidores mismos ser an quienes determinar an soberanamente qu  y cu nto quieren consumir, indicando a los productores, a trav s de sus decisiones de compra, cu les son sus preferencias. Lo real es que tal «soberan a» est  predeterminada por la acci n psicol gica de la propaganda, por la producci n simb lica de los monopolios que controlan los medios de comunicaci n de masas. Y la extensi n creciente de estos mecanismos de producci n simb lica a las contiendas electorales no puede sino deparar una p rdida directamente pol tica de la soberan a de las mayor as.

Desde esta perspectiva,  qu  significa mejorar de manera inmediata la vida de la gente? Una perspectiva moral contempor nea indicaría que debe actuarse para compensar las desigualdades, centrando recursos en las mayor as que no tienen acceso a niveles de vida hoy considerados m nimos. Esto supone un juego de suma cero, pues los recursos deben tomarse de los sectores minoritarios que se apropian la mayor parte de la riqueza, sea para alcanzar niveles de consumo suntuario y derroche abierto, sea para seguir acumulando y concentrando riquezas. En un sistema democr tico, donde las decisiones p blicas se tomaran por mayor a, este esquema deber a cerrar: la sociedad pol tica decidir a limitar el enriquecimiento de unos pocos y asegurar la participaci n de todos en los beneficios de la tecnolog a, del trabajo, de la organizaci n productiva. Ese no es el caso: sea por el inter s, sea por «pragmatismo», la clase pol tica y la clase capitalista negocian a espaldas de la voluntad popular acuerdos y pol ticas de Estado.

Pero no todo se resolver a f cilmente con un mecanismo de votaciones para decidir qu  se produce y qui n lo consume. De hecho, podr amos decir que en el mercado se «vota» qu  productos deben seguir produci ndose (aunque con voto calificado por los ingresos), pero los deseos y motivaciones de los «votantes» son manipulables por los grandes oferentes de productos.

Un aspecto de la mercantilizaci n de la pol tica es la manipulaci n de las elecciones con t cnicas, recursos y valores an logos a los de la competencia en el mercado. Un plebiscito sobre instituciones y valores correr a el mismo riesgo mientras subsistan las estructuras de poder econ mico y pol tico hoy imperantes. En todo caso, ese m todo no dar a f cil respuesta a contradicciones objetivas como las que se dan entre la satisfacci n inmediata y futura de las necesidades, entre el uso de plazos cortos de los recursos y la responsabilidad ante las generaciones venideras, entre ahorrar e invertir para ampliar la capacidad productiva o consumir ya. Se plantear an complejas opciones culturales entre valores de sobriedad y austeridad, de conservaci n y cuidado de los recursos limitados y valores asociados al derroche y la renovaci n per se, entre diversas concepciones sobre lo que es leg timo como acci n econ mica. Y, sobre todo, se reafirmar a el pragmatismo de las masas que, antes que complejos discursos sobre lo posible, requerir an ver y experimentar las alternativas como opciones realmente existentes.

III. La Econom a Popular como proyecto pol tico-cultural

Sin un cambio adecuado de macroestructuras, ni siquiera volver a plantear un programa p blico de pleno empleo o de seguridad social equitativa ser a ya eficaz. Ni tampoco ser a suficiente la sumatoria de iniciativas de la sociedad como las que hoy proliferan en nuestros pa ses. Una raz n, cuantitativa, es la incapacidad del modelo econ mico imperante para asignar recursos de uso social en magnitudes suficientes y a la vez sostener el proceso de acumulaci n capitalista. Otra tiene que ver con la calidad de las iniciativas: se act a marginal y localmente sobre la disponibilidad de infraestructura social y sobre la oferta social de bienes y servicios considerados imprescindibles, para atender a necesidades b sicas insatisfechas de un sector que abarca desde los pobres estructurales hasta sectores medios econ micamente empobrecidos, y a la vez se los contin a tensionando

mediante la exacerbación de una cultura individualista y consumista. Esas tácticas no construyen una alternativa estructural, que incluya a sus beneficiarios como productores y ciudadanos, sino que están dirigidas a que la gente aguante y sostenga su esperanza de ser reintegrada de manera estable al nuevo sistema moderno. Reconocer que los ciudadanos excluidos son algo más que desempleados momentáneos o consumidores temporalmente insatisfechos, apenas lleva a agregar a estos programas una dimensión de «empleo e ingreso», que generalmente es estática, no autosustentada y de difícil replicabilidad.

Tanto por la necesidad de las clases trabajadoras de contar con bases materiales más autónomas como por la necesidad política de mostrar prácticamente que hay alternativas superiores al actual estado de cosas, se requiere proponer e implementar otros modelos económicos. La magnitud de los niveles de exclusión que se prevén a medida que se extiende y profundice el nuevo sistema de producción a todas las regiones y ramas de actividad en que sea rentable, y la generalización de la difusión global de las pautas de consumo (nuevos bienes y servicios, centros comerciales, hipermercados, etc.) que requiere dicho sistema, permiten anticipar que continuar con el tipo de políticas sociales, programas e intervenciones asistenciales que se han venido planteando será insuficiente para cubrir la brecha creciente entre los objetivos del desarrollo humano y la realidad.

IV. La insuficiencia del «Tercer Sector»

Pasado el primer shock brutal del ajuste, se revitalizan o comienzan a aparecer propuestas que intentan a la vez resolver la brecha del empleo, recuperando la centralidad del trabajo en la sociedad y realizar la utopía de una sociedad cohesionada no sólo por la división del trabajo sino por vínculos de solidaridad interpersonal y social. Por ejemplo, la propuesta en boga de desarrollar un sector de economía social, liberado de los criterios de eficiencia y eficacia que impone el mercado capitalista, desviando

hacia él recursos y capacidades para resolver las necesidades de infraestructura y servicios a nivel local, confía en que esto irá generando nuevos valores y redefinirá la categoría central del trabajo como trabajo voluntario. Sin embargo, como dijimos, la sumatoria de ese tipo de emprendimientos no asegura ni siquiera que dichas necesidades básicas, por su misma naturaleza histórica, queden satisfechas. Pero si así fuera, ¿qué dinamizará ese tercer sector una vez cubiertos esos niveles básicos? ¿Cómo podrá sostenerse y sustentar adecuados equilibrios psico-sociales internos en una sociedad impregnada de los valores de la innovación consumista? Los niveles crecientes de excedente que deberían ser extraídos de la acumulación capitalista para sostener una integración social con los mismos valores consumistas que aquella genera, terminarían afectando la viabilidad del primer sector. Además, sostener una correlación política que mantenga el control sobre el excedente significa plantear la necesidad de modificar drásticamente el funcionamiento de un sistema político cada vez más dependiente de recursos financieros y mediáticos.

Todo parece indicar que, al menos en los países periféricos, la respuesta a la tercera revolución tecno-social del capitalismo no puede ser una colección de micro-intervenciones creativas dirigidas a satisfacer necesidades urgentes, ni siquiera de macro-intervenciones puntuales (como una ley de apoyo a las PYMES o el juicio político a gobernantes corruptos o ineficaces). Su impacto material y cultural sería marginal, al ser fácilmente fagocitados por el resto de las instituciones, dentro de un sistema cultural crecientemente producido por el capital, no sólo por los valores que introyecta en sus agentes sino porque las ramas de producción simbólica se han vuelto negocio del gran capital. Si se va a generar una alternativa, deberá incluir una transformación estructural del contexto en que se desenvuelven tales intervenciones, de las relaciones entre los tres subsistemas económicos (el empresarial capitalista, el público y el popular) y —paradójicamente— de la competitividad del tercer polo de la economía, para hacerlo generador y no sólo receptor de recursos económicos.

Existe una cuarta vía, que podría verse como integración y superación de las anteriormente mencionadas:

4. Que el excedente captado sea redirigido para fomentar de manera integral, desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad, el desarrollo de un subsistema socio-econ mico y cultural de producci n y distribuci n, o econom a popular, relativamente aut nomo y aut rquico, orientado estrat gicamente por la reproducci n ampliada de la vida de sus miembros. Dicha reproducci n se logra en parte mediante el consumo de su propia producci n (mediado o no por intercambios mercantiles entre agentes de este subsistema), en parte mediante la obtenci n de mayores ingresos en su intercambio con el sector de PYMES y el sector capitalista (venta de bienes, servicios y trabajo asalariado), pero tambi n mediante el desarrollo de relaciones comunitarias y sociales y estilos de vida de otra calidad.

Para ubicar la ECONOM A POPULAR como tercer polo de la econom a, es necesario ver la econom a como compuesta por tres subsistemas econ micos, y a la vez tres l gicas de la acci n econ mica: (ver cuadro 1).

En este esquema, todas las unidades dom sticas que no viven de la explotaci n del trabajo ajeno, ni pueden vivir de la riqueza acumulada (incluido inversiones en fondos de pensi n, etc.) sino que sus miembros deben continuar trabajando para realizar expectativas medias de calidad de vida, forman parte de la econom a popular, aunque todos o algunos de sus miembros trabajen en los otros dos subsistemas.

V.  Ser  viable esta alternativa?

La viabilidad del cambio social raramente est  lista, m s bien es algo a construir. Pero las propuestas sobre

el qu  hacer deben pasar el test de la plausibilidad. Una primera duda es si es posible constituir tal sub-sistema sin pretender la grandiosa tarea de sustituir al sistema capitalista. Este no puede ser su objetivo inicial, sino aprovechar las tendencias a la dualizaci n y las necesidades de legitimaci n de dicho sistema para constituir estructuras capaces de interactuar con las fuerzas destructivas del mercado capitalista y a la vez resistirlas. Otra duda es si el imperativo de la gobernabilidad, junto con los l mites morales y pol ticos que se plantea la sociedad global emergente, podr n imponer al capital el respeto a una econom a popular parcialmente resguardada de su fuerza competitiva. Se puede argumentar moral, social o pol ticamente, pero dada la correlaci n actual de fuerzas, es necesario mostrar la eficacia econ mica y social de la econom a popular para sostener la legitimidad y viabilidad de tal resguardo. Pero las condiciones de posibilidad para poder llegar a experimentar realmente esa eficacia como subsistema no son pocas ni f ciles, y requieren un punto de partida pol ticamente apuntalado.

Una econom a popular autosustentada requiere tiempo y recursos iniciales, para desarrollar otras estructuras e instituciones econ micas que le permitan superar su estado fragmentario y conformar un subsistema, org nicamente integrado pero abierto, cuya actividad productiva pueda satisfacer directamente parte de las necesidades de los sectores populares pero tambi n competir exitosamente por las voluntades de los consumidores en segmentos del mercado global, ocupar a los excluidos y generar los ingresos monetarios necesarios para articularse a trav s del mercado con el resto de la econom a, as  como el excedente econ mico necesario para sostenerse y ampliarse sobre sus propias bases. Esto no

CUADRO 1

sub-sistemas	l�gica/sentido	agentes
econom�a empresarial	acumulaci�n de capital	empresas, sus redes y aparatos ad hoc
econom�a p�blica	acumulaci�n y legitimaci�n del poder	organizaciones del estado, partidos pol�ticos, redes y aparatos ad hoc
econom�a popular	reproducci�n ampliada de la vida	unidades dom�sticas, sus redes y aparatos ad hoc

significa autosuficiencia, ni mucho menos la clausura de comunidades locales (aunque el desarrollo local puede ser una idea movilizadora de recursos y voluntades), pues requiere intercambios regulados con la economía del capital y la pública.

Lograr esa organicidad es una cuestión que no puede dejarse librada al decantamiento del mismo juego económico, ni suponerse que se logra con un acompañamiento ideológico al mismo tipo de proyectos aislados que hoy predominan. En esto radica una diferencia entre la propuesta de promover una economía popular y la de proseguir agregando a la sumatoria microproyectos locales. Promover la conformación de un subsistema de economía popular implica, sí, trabajar con microproyectos, pero también sobre las macrorrelaciones e instituciones que velan por el conjunto (regulación de intercambios, justicia económica, representación colectiva, amplias redes de financiamiento, sistemas de formación y capacitación, sistemas de investigación y control de calidad, etc.), operando simultáneamente en las diversas partes de un todo en vías de conformación. Implica invertir recursos importantes en el desarrollo, consolidación y alimentación de redes que articulen, comuniquen, dinamicen a la multiplicidad de emprendimientos y microrredes populares. Implica, por ejemplo, canalizar recursos de investigación y asesoría técnica de las universidades a la conformación de centros tecnológicos que alimenten y estimulen esas redes de manera permanente, expandiendo la frontera de lo posible para sus agentes privados o públicos. La repetida experiencia de emprendimientos que no pueden sobrevivir, cuando la ONG o el programa que los gestó los deja librados a sus propios medios, habla de un sistema de instituciones, entre ellas el mercado, estructuralmente hostiles al surgimiento y desarrollo de tales emprendimientos. Esto debe ser reconocido, e institucionalizados los mecanismos para contrarrestar los efectos innecesariamente destructores del proceso de selección darwiniana. El proceso histórico de conformación de nuestras naciones constituyó sistemas legales pretendidamente universales pero en realidad pro-empresariales y sesgados contra la economía popular y sus instituciones. Por eso se requieren reformas jurídicas mayores para facilitar el surgimiento de las nuevas instituciones económicas.

Además, para que estas nuevas estructuras jurídicas y económicas no sean subsumidas por la lógica del capital y la del poder político a él asociado, es necesario también emprender una profunda transformación cultural, de los valores sobre la buena vida, la justicia, el trabajo, la democracia y los límites de la legitimidad en el ejercicio del poder. La equidad no es un factor que se puede agregar a la transformación productiva, sino que tiene que encarnarse en nuevas estructuras económicas. Si se pretende realmente encontrar una solución permanente a los problemas del desempleo, la precariedad y la exclusión, no podrá reducirse la acción a microprogramas ni a políticas sectoriales de empleo dentro de las mismas macroestructuras. Se requieren reformas estructurales en los sistemas fiscales regresivos y de control no participativo de los recursos públicos, hoy librados a concertaciones entre las cúpulas políticas y las corporativas. Se requiere desarmar las estructuras de poder coercitivo (incluida la creciente fuerza de las mafias), que intimidan la libre expresión e incluso la libre actividad económica de las mayorías. Se requiere un cambio en la cultura política, un rechazo ético al chantaje clientelista y a la corrupción, hoy mal justificada por criterios de eficacia. Se requiere acceso a los medios de comunicación de masas para generar y proponer otros valores y estilos de vida a la población, apelando a los mejores valores que ha desarrollado la sociedad humana y evitando las respuestas chauvinistas o fundamentalistas antimodernistas. Se requiere la organización y el ejercicio de un poder económico popular en el mercado, que apunte la competitividad de la producción popular. Se requieren mecanismos de control de la calidad de esa producción, desarrollando los mejores valores del artesanado: el orgullo por el producto del propio trabajo, la valoración de la creatividad, la vinculación honesta con el usuario, la búsqueda de los términos justos del intercambio, la valoración de la cooperación y del autocontrol a nivel social, evitando desatar procesos destructores y alienantes.

Tales frentes de acción sólo pueden encararse sinérgicamente si, de la multiplicidad de acciones públicas y privadas orientadas a resolver las necesidades inmediatas de las mayorías, emerge un movimiento complejo, pluralista y heterogéneo —por sus actores y por la libertad

y diversidad de sus iniciativas—, que comparta un paradigma de acción social transformadora. Sólo en ese contexto cobrarían nuevo sentido y se potenciarían la multiplicidad de políticas y programas dirigidos a los sectores populares. En América Latina, el desarrollo humano requiere (pero no puede reducirse a cubrir el acceso a) medios de vida de primera necesidad. Tampoco puede lograrse con intervenciones puramente ideológicas para inculcar nuevos valores. Economía y cultura deben articularse sinérgicamente en intervenciones que generen recursos y relaciones sociales acordes. Cómo se accede es tan importante como cuánto se obtiene y para lograr qué clase de vida. Ni el consumismo ni la caridad son la vía para un cabal desarrollo humano. Pretender lograr todos estos cambios supone un proyecto político-cultural y un amplio movimiento que lo sustente de manera congruente en la escena política y en las búsquedas colectivas de resolución a los problemas urgentes de cada localidad o grupo, articulando los esfuerzos de desarrollo local dentro de una perspectiva macrosocial del desarrollo.

En esto será fundamental la posición estructural de la capa de dirigentes sociales y

políticos tanto como de los técnicos, promotores, investigadores y tantos otros agentes que operan como mediadores desde ONGs, organizaciones sociales, centros educativos, asociaciones culturales, iglesias, movimientos sociales, etc. Un «tercer sector», conformado como una capa de mediadores entre la economía popular y las economías empresarial (Ejemplo: filantropía) y pública (Ejemplo: ONGs que canalizan recursos públicos en la gestión descentralizada de programas sociales), tenderá a convertirlos en parte de la élite, funcional en última instancia a la reproducción de un sistema dual. Si, en cambio, son subsumidos por la lógica de la economía popular, que requiere también de sus propios intelectuales, profesionales y técnicos orgánicamente incorporados a un proyecto de transformación, se fortalecerán las posibilidades de una respuesta efectiva, no sólo al desempleo y la flexibilización del trabajo sino al proyecto hegemónico del capital global. Y esto no es contradictorio con la viabilidad y la competitividad en el mercado global, sino que permitirá lograrlas sobre bases de una mayor cohesión social, capacidad de autosustentación económica y estabilidad política.

Sociología del Trabajo

NUEVA ÉPOCA

Dirección: Juan J. Castillo, Santiago Castillo.

Consejo de Redacción: Vicente Albaladejo, Arnaldo Bagnasco, Juan J. Castillo, Santiago Castillo, Michel Freyssenet, Enrique de la Garza, Ilona Kovács, Marcia de P. Leite, Ruth Milkman, Alfonso Ortí, Manuel Pérez-Yruela, Ludger Pries, Carlos Prieto, Helen Rainbird, Antonio J. Sánchez, José M.^a Sierra, Jorge Uría, Fernando Valdés Dal-Re.

Número 36 (primavera de 1999)

Nuevos desafíos en el mundo del trabajo

Marcia de Paula Leite, *Nuevos desafíos en el mundo del trabajo*

Miguel Á. García Calavia, *La "reprofesionalización" del trabajo: ¿una nueva panacea tecnológica?*

Teresa Torns, Vicent Borràs y Alfonso Romero, *El acoso sexual en el mundo laboral: un indicador patriarcal*

Cristina Beltrán Pérez, *El empleo temporal en el mercado de trabajo español. Propuestas para la integración de los sujetos en un enfoque analítico global*

Ana M.^a Rivas, *Solidaridad intergeneracional: ¿quién depende de quién?, ¿quién ayuda a quién?*

Rubén Vega García, *Los contextos de la acción sindical: franquismo, transición y democracia*

LIBROS

Juan Manuel Irazo, JUAN JOSÉ CASTILLO, *A la búsqueda del trabajo perdido*

Redacción: Revista *Sociología del Trabajo*.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Campus de Somosaguas. 28223 Madrid.

Edición y administración: Siglo XXI de España Editores, S. A.

Príncipe de Vergara, 78 - 2.º dcha. 28006 Madrid

Teléf. 91 562 37 23 - 91 561 77 48. Fax: 91 561 58 19

Suscripciones

Mundi-Prensa Libros, S. A.

Castelló, 37. 28001 Madrid

Tel.: 91 436 37 01

Fax: 91 575 39 98

anual (3 números)

España: 4.000 ptas. (núm. suelto: 1.400 ptas.)

Europa: 4.500 ptas. (núm. suelto: 1.750 ptas.)

Resto del mundo: 40\$